

Id Cendoj: 35016340012005101280
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 1
Nº de Recurso: 677/2003
Nº de Resolución: 1270/2005
Procedimiento: Recurso de suplicación
Ponente: EDUARDO JESUS RAMOS REAL
Tipo de Resolución: Sentencia

Secretaria: D^a. M^a EUGENIA CALAMITA DOMÍNGUEZ

Ilmos. Sres:

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

D^a MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de Noviembre de 2005.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de suplicación interpuesto por D^a Camila contra la sentencia de fecha 13 de febrero de 2003, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL de Gáldar en los autos de juicio 1.568/2002 sobre prestaciones (incapacidad permanente), ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D^a Camila contra el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 13 de febrero de 2003 por el JUZGADO de lo SOCIAL de Gáldar. SEGUNDO.- En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

PRIMERO.- La demandante Dña, Camila , con DNI nº NUM000 , nacida el 5 de Febrero de 1946, está afiliada a la Seguridad Social con el nº NUM001 , en el Régimen Especial Agrario por cuenta propia, de profesión agricultora. SEGUNDO.- Inició expediente de solicitud de incapacidad permanente derivada de enfermedad común el 18 de Junio de 2002, emitiéndose dictamen propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades en fecha 15 de Julio de 2002 donde se determina el siguiente cuadro clínico: "Artrosis primaria vertebral y periférica incipiente. **Fibromialgia** . Intervenida de T. Carpo bilateral. Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes; para actividades de grandes esfuerzos con C. cervical y MM.SS. Por resolución de fecha 13 de Agosto de 2002 la Entidad Gestora deniega la prestación solicitada por las siguientes causas Por no alcanzar las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser constitutivas de una incapacidad permanente, según lo dispuesto en los artículos 136 y 137 de la Ley General de la Seguridad Social , aprobada por Real Decreto Legislativo

1/1994, de 20 de Junio (BOE 29/06/1 994), en relación con los artículos 19, 27.1 y 31 del Texto Refundido de la Ley del Régimen Especial Agrario , aprobado por Decreto 2123/1971 de 23 de Julio (BOE 21/09/71), contra la cual se interpuso reclamación previa en fecha 4-09-2002 siendo desestimada por resolución de 7 de Octubre de 2002. TERCERO.- La actora ha estado en incapacidad temporal desde el 6 de Noviembre de 2001 hasta el 12 de Junio de 2002, fecha en la que fue dada de alta con propuesta de incapacidad. CUARTO.- La demandante presenta el siguiente cuadro residual: Fibromilagia. Síndrome del túnel carpiano bilateral. Intervenida sin mejoría. Tenosinovitis de Quervain en muñeca derecha. Artrosis vertebral: Retrolistesis L4. Artrosis periférica. Nódulos de Bouchard y Heberden en manos, artrosis trapecio metacarpiana. Artrosis fémoro patelar. Hallux valgus. Ha precisado tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, cirugía del túnel carpiano e infiltraciones en la mano derecha, férula de descanso nocturno y rehabilitación. Asimismo se encuentra bajo control por su médico de cabecera en relación a síndrome ansioso depresivo de carácter reactivo a su situación física, de un año de evolución. QUINTO.- Las tareas que realiza la demandante son las propias de la actividad de la agricultura. SEXTO.- La base reguladora de la prestación

solicitada asciende a 467,52 Euros.

TERCERO.- La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Camila , contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y declaro que la demandante se encuentra afecta de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, en el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de agricultora, condenado al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por la anterior declaración y a abonar a la demandante una pensión en la cuantía equivalente al 55 por ciento de su base reguladora de 467,52 Euros, con las revalorizaciones y mejoras que legalmente le correspondan, y con efectos de 12 de Junio de 2002.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la pretensión de la actora, D^a Camila , trabajadora encuadrada en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REA), que interesaba ser declarada en situación de invalidez permanente, en grado de incapacidad permanente absoluta para todo oficio o profesión o, subsidiariamente, en el grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Agricultora por cuenta propia, revocando la resolución de la Dirección Provincial del INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL (INSS) de fecha 13 de agosto de 2002 (que le denegaba la solicitada prestación por considerar que las lesiones que padece no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de invalidez permanente en ninguno de sus grados), declarándola en situación de invalidez permanente, en grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual. Frente a la misma se alza la actora mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un único motivo de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se estime la pretensión principal articulada en la demanda que da origen al presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la recurrente la infracción del artículo 137 párrafo 5º (actual artículo 137 párrafo 1º letra c) del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social, definidor del grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que las lesiones descritas en el relato fáctico de la sentencia combatida limitan la capacidad física de la interesada para el ejercicio de cuantas ocupaciones pudiera ofrecerle el mercado laboral.

El grado de incapacidad permanente absoluta está configurado en el T.R. de la Ley General de la Seguridad Social como el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio (artículo 137 párrafo 5º, 137 párrafo 1º c . actual). La jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 9 de febrero de 1987 que ha recopilado la doctrina en tal sentido) establece que:

"Este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumir, con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de

valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumir a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen"

(en el mismo sentido sentencias de 24 de febrero y 16 de julio de 1987). La jurisprudencia viene entendiendo que la declaración de invalidez permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral (sentencia de 10 de noviembre de 1982), atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales (sentencia de 25 de enero de 1983), o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional (sentencias de 22 de enero de 1985, 24 de enero, 12 de junio y 22 de noviembre de 1989, 22 de enero, 2 de abril, 30 de junio, 20 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 1990). La determinación de tal grado de invalidez ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a apreciar conjunta o simultáneamente, de un lado, la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación. De tal manera que el *artículo 135 párrafo 5º del T.R. de la Ley General de las Seguridad Social* no debe ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más de su tenor literal, en evitación de que resulte imposible su aplicación real, y sí, por el contrario, sin perder nunca de vista la objetividad que el sentido propio de sus palabras comporta, en relación con el contexto y sus antecedentes históricos, debe actuarse dicha norma de tal suerte que su aplicación atienda fundamentalmente a alcanzar el espíritu y la finalidad que determinaron su promulgación (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio, 5 y 6 de octubre de 1981, 10 de abril, 2 de junio, 26 y 29 de noviembre, 3 de diciembre de 1984, 22 de abril, 10 y 19 de junio de 1985 y 16 y 27 de febrero, 13 de junio de 1989, 22 de enero, 7 de marzo y 11 de diciembre de 1990).

Del inalterado relato de hechos probados de la sentencia recurrida se desprende que la actora padece: fibromilagia, síndrome del túnel carpiano bilateral, tenosinovitis de Quervain en muñeca derecha, artrosis vertebral, retrolistesis L4, artrosis periférica, nódulos de Bouchard y Heberden en manos, artrosis trapecio-metacarpiana, artrosis fémoro-patelar, hallux valgus y síndrome ansioso depresivo de carácter reactivo a su situación física de un año de evolución (controlado por su médico de cabecera). Tales lesiones de tipo degenerativo han precisado de tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, cirugía del túnel carpiano, infiltraciones en la mano derecha, la colocación de una férula de descanso nocturno y rehabilitación (hecho probado cuarto).

Los referidos padecimientos le producen las siguientes limitaciones funcionales: incapacidad para realizar grandes esfuerzos con la columna cervical y con los miembros superiores (hecho probado segundo).

Confrontando la capacidad residual de la Sra. Camila con el conjunto de tareas que componen su habitual quehacer laboral, la Sala, coincidiendo plenamente con lo manifestado por el Magistrado de instancia, entiende que la actora carece de la suficiente aptitud física para afrontar con profesionalidad y eficacia las tareas propias de su dura profesión habitual de Agricultora Autónoma, pero que aun conserva capacidad residual suficiente para el ejercicio de aquellas actividades livianas, sedentarias o sencillas que no impliquen la realización de los esfuerzos físicos con la columna vertebral (a nivel cervical) y con los miembros superiores para los que se encuentra impedida (téngase en cuenta que la trabajadora conserva íntegra la capacidad de deambulación, bipedestación y sedestación).

Lo expuesto conduce a la Sala, al haberlo entendido así el Magistrado de instancia, a la desestimación del motivo, por su efecto del recurso y a la confirmación de la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D^a Camila contra la sentencia de fecha 13 de febrero de 2003, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL de Gáldar en los autos de juicio 1.568/2002 , la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito BANESTO, cuenta número 3537/0000660677/03 a nombre de ésta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital coste de una pensión de la Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito BANESTO, cuenta corriente 24100000660677/03, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, procediéndose al archivo del Rollo sin más trámite.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.